

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-31897-2019
CARATULADO : FRITIS/FISCO DE CHILE/CDE

Santiago, veintiuno de Abril de dos mil veintidós

VISTO:

A folio 1, con fecha 04 de noviembre, comparece **Boris Paredes Bustos**, abogado, domiciliado en Doctor Sótero del Río N°326, oficina 707, comuna de Santiago, en representación judicial de **EDMUNDO EUFEMIO FRITIS BURGOS**, trabajador, C.I. 10.035.736-4, domiciliado en Abrahín Yanguer Nro. 629, Tongoy, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios en juicio de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por **María Eugenia Manaud Tapia**, abogada, en su calidad de Presidente del **Consejo de Defensa del Estado**, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1687, Edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago, con la finalidad de que: 1) se declare que el demandado debe pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios, la cantidad de \$200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y



Foja: 1

hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, y 2) se condene en costas a la parte demandada.

Funda la demanda en que el demandado, entonces militante de las Juventudes Comunistas, con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 8.843, fue detenido con violencia el 28 de julio de 1985 en la vía pública en la ciudad de Lota, cuando tenía 18 años y, en consecuencia, era menor de edad.

Fue trasladado a la Comisaria de Lota Alto, donde permaneció dos días. El 31 de julio fue trasladado a la Comisaría de Lota Bajo. Se lo acusó de infringir la Ley de Control de Armas y fue puesto a disposición de la Segunda Fiscalía del Tercer Juzgado Militar de Concepción, dándose origen a la causa rol 458-85. Posteriormente, con fecha 02 de Agosto de 1985, fue ingresado en la cárcel de Concepción por cuatro meses en la sección de presos comunes, arriesgando su integridad constantemente, para luego ser trasladado en la cárcel a la sección de presos políticos.

En ambas comisarias, prosigue, fue torturado por funcionarios de carabineros con golpes de pies y puños y culatazos en distintas partes de su cuerpo y



Foja: 1

aplicación de corriente eléctrica, especialmente en testículos, pene, sienes y paladar, tortura que fue permanente durante aquellos días, hasta su ingreso en la cárcel de Concepción. Producto de lo anterior, perdió parte de la sensibilidad de su pierna izquierda y sufre dolores crónicos en la misma, consecuencia directa de la tortura sufrida, padeciendo, además, de trastorno de estrés post traumático.

Señala que fue puesto en libertad el 07 de marzo de 1986. A consecuencia del daño emocional y psicológico, decidió no permanecer en su hogar por temor a la persecución y a las represalias contra su persona y su familia, evitando tener un paradero fijo y contacto con ésta. Por ello, vivió en la calle, en situación de indigencia, por más de seis años. Debido a la persecución política, torturas e injusta privación de libertad sufrida en su juventud no pudo terminar su enseñanza media, con lo que se vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Terminó la educación media a los 45 años, y el daño psicológico le provocó un distanciamiento afectivo de su familia lo ha marcado socialmente.

En cuanto a los daños sufridos por el



Foja: 1

demandado, como consecuencia de las torturas, se desprende inequívocamente un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta (sic) años de lo sucedido continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido.

Añade que el daño moral causado es obvio, público y notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente.

En cuanto al derecho, sostiene que la responsabilidad del estado emana del Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, específicamente de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional.

Agrega que la responsabilidad del estado, consagrada tanto en las Actas Constitucionales N°2 y 3, como en la Constitución de 1980, tiene



Foja: 1

antecedentes en la Constitución de 1925, vigente a la época del ilícito.

Afirma que la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, pues todos los sujetos tanto públicos como privados deben responder por sus actos y omisiones en un estado de derecho. Por ello, cualquier sujeto agraviado por los órganos públicos puede demandar el resarcimiento de los perjuicios ante los Tribunales de Justicia. Tal doctrina se fundamenta en el principio de igualdad, ya plasmado en el artículo 10 N°1 de la Constitución de 1925. Los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925, son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N°9.

El artículo 4 de la Constitución de 1925, explica, fuente directa de los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones



Foja: 1

adolecían de nulidad. Si bien no se agregaba que de dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señale, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. Por su parte, el artículo 10 N°9 de la Constitución de 1925, fuente del artículo 19 N°20 de la Constitución de 1980, aseguraba el principio de la igual repartición de las cargas públicas, el que obliga a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, ya que dicho daño producido antijurídicamente, implica una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas, derecho que la Constitución aseguraba y amparaba frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos.

A continuación, afirma que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado es imprescriptible, pues no cabe aplicar las normas del Título XXXV del Código Civil.

Abundando en lo anterior, agrega que la responsabilidad extracontractual del estado emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases



Foja: 1

Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración.

Sostiene que concurren en la especie los requisitos de la obligación del estado de indemnizar los perjuicios; el daño mora, la acción u omisión de un órgano del estado, el nexo causal, y la falta de causales de justificación.

Agrega que, dado que los hechos descritos tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran iuscogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que *"el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales"* y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su



Foja: 1

responsabilidad internacional.

Así, explica, el Derecho Internacional, tanto a partir de normas consuetudinarias como convencionales, ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño. Para que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva deben concurrir dos elementos. El primero de ellos es la violación de una obligación internacional, situación que en el caso presente se encuentra plenamente cumplida pues la privación ilegítima de libertad y las torturas graves y reiteradas, cometidos en contra de las demandantes, mirados desde la perspectiva del derecho internacional, asumen la tipología de delitos contra el derecho internacional y, en este caso específico, como delitos de Lesa Humanidad, en la medida que el ilícito cometido se da en el contexto histórico de atentados masivos, reiterados y sistemáticos en contra de la población, motivados por móviles políticos e ideológicos y ejecutados por agentes estatales, otorgan la configuración de un delito de Lesa Humanidad, con las naturales consecuencias jurídicas que derivan de dicha calificación.

Añade que la responsabilidad del estado es



Foja: 1

integral, por lo que debe repararse todo daño, comprendiendo el daño moral.

A folio 9, consta la notificación de la demanda efectuada el 03 de diciembre de 2019.

A folio 10, con fecha 20 de diciembre de 2019, comparece Ruth Israel López, abogada procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda, solicitando su rechazo, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto pretendido.

Como primera defensa, opone la **excepción de reparación integral**, esgrimiendo la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el actor, exponiendo latamente, el marco general sobre las reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de



Foja: 1

reparación; programas que incluyen beneficios educativos, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Señala que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada "Comisión Rettig", en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una **pensión única de reparación** para los familiares directos de las víctimas, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso, que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; por él se buscaba, en términos generales, "**reparar precisamente el daño moral** y *patrimonial que ha afectado a los familiares directos de víctimas*", a que se refiere su artículo 18.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante



Foja: 1

los cuales se ha concretado la compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas.

Afirma que en la especie, el actor ha percibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas; así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.-, para beneficiarios



Foja: 1

mayores de 75 años de edad, haciendo presente además que percibieron en forma reciente el aporte único de reparación Ley N°20.874, por **\$1.000.000.-**

Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.

Finalmente, hace presente las reparaciones simbólicas, mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones; las que pretenden reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.



Foja: 1

De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la excepción de reparación integral**, por ya haber sido indemnizado el actor.

En segundo lugar, **opone la prescripción extintiva de la acción**, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.



Foja: 1

Según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal, privación de libertad y tortura que sufrió aquél, ocurrieron entre el 28 de julio de 1985 y el 07 de marzo de 1986; entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **03 de diciembre de 2019**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable, **opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años**, contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con



Foja: 1

creces, el plazo pertinente.

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Sostiene que la prescripción es una institución universal y de orden público, y que las normas que la consagran, contempladas en el Título XLII del Libro IV del Código Civil, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho, y no sólo al privado. La imprescriptibilidad es excepcional y requiere una declaración explícita, que en este caso



Foja: 1
no existe.

Finalmente, sostiene que los ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, **resulta excesiva**, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han



Foja: 1

actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del **daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado**, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente, alega la **improcedencia del pago de reajustes e intereses**, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca la obligación y además desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada; y en cuanto a los intereses, señala que conforme al



Foja: 1

artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en mora sino hasta cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; cuestión que así ha establecido la jurisprudencia, de manera uniforme; motivos por los cuales los reajustes e intereses, **sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.**

A folio 13, la demandante viene en evacuar la réplica.

En cuanto a la **excepción de reparación satisfactiva o integral, o de pago,** afirma que ésta es irreconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional.

Añade que la preceptiva invocada por el Fisco, que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales, no es de ninguna manera incompatible con la indemnización que aquí se persigue, ya que estas reparaciones no dan cabida para reparar todo el daño que se les ha ocasionado a las víctimas. Por otra parte, no se ha establecido en las respectivas



Foja: 1

leyes ya mencionadas, ningún régimen de incompatibilidad con las indemnizaciones judiciales, ni mucho menos que su aceptación implique una renuncia a las acciones judiciales correspondientes. Con estas leyes, el Estado asume voluntariamente formas distintas de reparación.

Respecto de la **excepción de prescripción extintiva**, afirma que la jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha sido enfática en señalar, en múltiples ocasiones que, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, la que es integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, y que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley



Foja: 1

19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños.

En cuanto al **monto de la indemnización**, sostiene que éste resulta justo en atención a la entidad del daño.

Respecto de los **reajustes e intereses**, afirma que están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

A folio 15 la demandada viene en evacuar la dúplica.

En cuanto a la excepción de reparación integral, se remite a lo ya señalado. En concreto, el demandante **ha recibido** por concepto de Ley N° 19.992 pensión, percibiendo desde el 01/02/2005 al 30/11/2019 la suma de \$26.553.314; por aporte único Ley 20.874 la suma de \$ 1.000.000 y por concepto de aguinaldos durante el periodo la suma de \$452.710.-, todo lo cual da **un total a la fecha de \$28.006.024.-.**

En cuanto a la excepción de prescripción, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno



Foja: 1

de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 "Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno", que concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, criterio que ha sido sostenido desde hace más de 10 años por nuestro máximo Tribunal, el que también ha dejado establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

Finalmente, se invoca la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 16 de marzo de 2016, que se pronuncia sobre las excepciones de pago y de prescripción.

A folio 16 se recibió la causa a prueba.

A folio 40 se citó a las partes a oír sentencia, por resolución que se encuentra firme.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: A folio 1, comparece **Boris Paredes**



Foja: 1

Bustos, abogado, en representación convencional de **EDMUNDO EUFEMIO FRITIS BURGOS**, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios, en contra del **FISCO DE CHILE**, con la finalidad de que: 1) se declare que el demandado debe pagar al demandante, a título de indemnización de perjuicios, la cantidad de \$200.000.000.- más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho, y 2) se condene en costas a la parte demandada.

SEGUNDO: Que la parte demandada contestó la demanda solicitando su rechazo, y se evacuaron los trámites de réplica y dúplica con los fundamentos ya reseñados.

TERCERO: Que con el objeto de justificar sus dichos la demandante rindió la siguiente prueba:

Instrumental

A folio XX:

1) Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1.

2) Nómina de Presos Políticos y Torturados Comisión Valech 1, en la que el demandante Fritis Burgos, Edmundo Eufemio figura bajo el número



Foja: 1
8843 (p. 223) .

3) Copia de antecedentes de carpeta del demandante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

4) Certificado Psicológico y Social referido al demandante, emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos con fecha 07 de octubre de 2020.

A folio 31:

5) Certificado de Salud, emitido por el PRAIS con fecha 17 de noviembre de 2021, conforme con evaluación iniciada en 06 de octubre de 2021.

CUARTO: Que, la parte demandada se valió de los siguientes medios probatorios en autos:

Instrumental

A folio 23:

1) Copia de ORD. N°62916/2020, emitido por Instituto de Previsión Social con fecha 02 de enero de 2020, que da cuenta de los beneficios de reparación recibidos por el demandante en conformidad con las Leyes 19.992 y 20.874, que a tal fecha totalizan la cantidad de \$28.006.024.-

QUINTO: Que la prueba allegada al proceso, así



Foja: 1

como los hechos en que las partes se encuentran
contestes, permite tener por acreditado:

1) Que el actor Edmundo Fritis Burgos, fue
detenido el 28 de julio de 1985.

2) Que el demandante se encuentra reconocido
como persona víctima de violación de derechos
humanos como preso político y torturado, pensionado
a raíz de su incorporación a los Informes de la
Comisión Valech.

SEXTO: Que el 11 de Noviembre de 2003,
transcurridos **13 años** desde que se restableció el
Estado de Derecho en nuestro país, durante el
gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos
Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el
cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la
Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos
en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras
del propio gestor, fue determinar el universo de las
personas que sufrieron privación de libertad y
torturas por razones políticas, entre Septiembre de
1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un
Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado
con 28.000 testimonios de considerados válidos (se



Foja: 1

recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SÉPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que *"Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica"*, cuyo artículo primero, contenido en el Título I *"De la pensión de reparación y bono"*, dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión*



Foja: 1

Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$1.480.284.-** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$1.549.422.-**, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de **\$3.000.000.-**, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la



Foja: 1

pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que *"Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile"*, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de **\$1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de*



Foja: 1

reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."

NOVENO: Que, tal como consta del documento reseñado en el motivo cuarto, el demandante detentan la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que percibe en virtud de tal calidad, al mes de **enero de 2020, la suma de \$28.006.024.- por concepto de pensión de reparación.**

DÉCIMO: Que la **excepción de pago (reparación integral)** opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que el actor ya ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios por el cúmulo de acciones reparatorias resultando en consecuencia improcedente ser indemnizado por daños cuya génesis radica en idénticos hechos será desestimada como se dirá a continuación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excma. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener



Foja: 1

su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el demandante beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso político torturado", tal hecho no era óbice para que interpusiera la acción civil pertinente, como lo ha hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral)**.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos



Foja: 1

Humanos y, la consagración normativa, en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta Fundamental, y por ende es obligación del Estado reparar todo daño que se haya ocasionado.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, asimismo, el demandado opuso la **excepción de prescripción de la acción**, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.



Foja: 1

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

DÉCIMO TERCERO: Que la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, *"tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable*



Foja: 1

existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, N° 29448-2018, de 27 de agosto de 2019, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el



Foja: 1

mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, no parece consistente ni coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la legislación interna pues aquello contraría la voluntad expresa manifestada en la normativa internacional sobre Derechos Humanos e incluso reconocida en las Leyes N° 19.123 Y 19.992 que reconoce de manera explícita la existencia de daños y concedió beneficios económicos, por lo que otorgarles un trato desigual es discriminatoria y el ordenamiento jurídico no lo permite.

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos.



Foja: 1

DÉCIMO CUARTO: Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse **sobre la procedencia de la indemnización pretendida.**

Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, Edmundo Fritis Burgos detenta la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber sido, a la época, militante de las Juventudes Comunistas, como así se señala en su demanda.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante todo el período en que estuvo detenido, como también en los tiempos futuros.

Por lo expuesto, este Tribunal concluye que dicha situación produjo en el actor daños que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la



Foja: 1

integridad física y psíquica, no siendo posible tolerar que en la especie los agentes del Estado actuaran de manera reprochable y contrarios a los derechos que tanto la legislación interna como internacional protegen, por lo que el Estado debe responder por ello.

DÉCIMO QUINTO: Que, con la documental rendida por la parte demandante y no objetada por causal legal, en su oportunidad, se puede establecer que está reconocida su calidad de "Preso Político y Torturado" (Nómina de personas reconocidas como víctimas, del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en donde la demandante ocupa el lugar **N°8843**, y por informes médicos acompañados al proceso, es posible advertir que una persona que es violentada física y psicológicamente, como en el caso de autos, sufre perjuicios, daño emocional y secuelas psicológicas que perduran hasta la actualidad y que deben ser reparados.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, encontrándose acreditado el hecho que el actor sufrió daños debido a la detención y torturas, un daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral"; por otro lado, teniendo presente los montos que percibe o ha percibido el demandante



Foja: 1

en su calidad de "Preso Político y Torturado", hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar a su favor la suma única y total de \$ 70.000.000.- (**setenta millones de pesos**), que se estima justa y equitativa, considerando como se ha dicho que actualmente es, ha sido y será beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado previamente, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados durante el mismo período.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado;

2.- Que **se acoge** la demanda intentada **a folio 1**, y se condena al Fisco de Chile a pagar al actor,



C-31897-2019

Foja: 1

Edmundo Eufemio Fritis Burgos, la cantidad de \$
70.000.000.- en la forma señalada en el motivo
final.

3.- Que, se condena en costas al demandado.

Regístrese y notifíquese, y elévese en
consulta si no se apelare.

ROL C-31.897-2019

**DECTADA POR WILSON RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JUEZ
SUPLENTE DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162
del C.P.C. en **Santiago, veintiuno de Abril de dos mil veintidós**

